

RETOS El fragmentado mapa político resultante de las elecciones del 20-D deja la puerta abierta a la posibilidad de acometer un gran pacto de Estado que transforme y modernice la educación superior.

A la espera de una reforma inaplazable

Rubén González, Madrid

Las elecciones del 20 de diciembre han dejado un Parlamento muy fragmentado en el que será más necesario que nunca alcanzar grandes acuerdos para conformar mayorías. Esta situación, de incertidumbre para algunos, resulta especialmente propicia, según otras opiniones, para que los grandes partidos españoles recuperen la vieja costumbre de alcanzar grandes pactos de Estado. Por ejemplo, en el ámbito de la formación universitaria, donde persisten, desde hace demasiados años, un buen número de asuntos que precisan de una reforma en profundidad.

El PP se presentó a las elecciones de 2011 con la intención de llevar a cabo muchas de estas transformaciones, pero sus cuatro años de gobierno con mayoría absoluta sólo han dejado “meros retoques cosméticos”, opina Rafael Puyol, presidente del Patronato de IE University. El también ex rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue uno de los componentes del comité de sabios impulsado en 2013 por el entonces ministro José Ignacio Wert para analizar las transformaciones que debía acometer la universidad. “En el informe resultante se hablaba de los esfuerzos que había realizado la institución a lo largo de la democracia, que eran muchos, pero también de los aspectos en los que aún necesita mejorar”, apunta Puyol.

Sin embargo, el estudio elaborado por la *Comisión Wert* cayó en saco roto y los principales cambios introducidos por el Gobierno de Rajoy consistieron en reducir los presupuestos de las universidades públicas (en 1.500 millones de euros), aumentar las tasas (hasta un 20%), endurecer el acceso a las becas (Erasmus) o incluso suprimirlas (Séneca) y, en general, recortar todas las ayudas a los estudiantes (que han caído en más de un 13%). Al margen de cuadrar las cuentas, el ministro Wert también impulsó el sistema 3+2 (que reduce los grados a tres años y los acompaña de posgrados de dos), “un cambio muy puntual”, según Puyol, “mientras los grandes asuntos continúan pendientes de ser resueltos”.

Por ejemplo, no se ha abordado la necesidad de experimentar con nuevos sistemas de gobierno en las universidades, “porque los actuales ya se han quedado obsoletos”, explica Puyol. En su informe, los expertos

también abogaban por actualizar los mecanismos de elección del profesorado, introduciendo unos procedimientos de selección más objetivos “que reduzcan la endogamia en el ámbito docente y mejoren la calidad de la enseñanza”, explica Puyol. En cuanto a los contenidos pedagógicos, la *Comisión Wert* proponía una reestructuración de las titulaciones existentes, que superan las 6.000. Tal como sostiene Puyol, “hay demasiadas y, además, algunas de ellas son repetitivas o incluso carecen de unos contenidos mínimos”.

Aquel informe también proponía una profunda revisión de los mecanismos de financiación de las universidades. Fundamentalmente, se reclamaban más recursos públicos para subvenciones, becas y ayudas. “Al mismo tiempo”, añade Puyol, se destacaba la necesidad de que las universidades “aumenten sus esfuerzos por captar fondos privados y, en general, incrementen su interacción con el mundo empresarial”. Según Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), estos cambios en materia financiera deberían pasar por “aumentar los recur-

Los principales cambios del anterior Gobierno se basaron en ajustar el gasto en ayudas y subvenciones

El país sólo invierte el 1% de su PIB en la enseñanza superior, frente al 1,5% gastado de media en la UE

sos, recuperar la tasa de reposición de los profesores hasta el 100% e introducir una financiación competitiva, mucho más ligada a resultados”.

Tal como ponen de manifiesto los principales indicadores, España continúa a años luz de sus vecinos europeos en inversión en educación superior. Por ejemplo, apenas destina a este concepto un 1% de su PIB (frente al 1,5% de la UE) y las ayudas a los estudiantes se quedan en un 0,1% (mientras que la media de los países de la OCDE alcanza el 0,3%). En cuanto a la situación de los profesores, la no reposición de los que se han ido jubilando durante los últimos cuatro años “ha provocado un enve-



La internacionalización de las aulas es uno de los principales desafíos de la universidad española, con apenas un 2,8% de alumnos extranjeros. / EFE

jecimiento de la docencia”, apunta Michavila, “con sólo el 27% de docentes por debajo de los 40 años”. Además, añade, “se ha acabado con las canteras de profesores e investigadores, esenciales para mejorar la calidad de la enseñanza”. En cuanto a la necesidad de vincular la financiación a la competitividad de las universidades, hasta hace una década ya se hacía algo parecido (un 10% de los recursos dependía de los resultados de cada centro), “pero eso también ha desaparecido en la última legislatura”, sostiene Michavila.

La última gran sugerencia de los expertos de la *Comisión Wert* apostaba por aumentar la internacionalización de las universidades españolas mediante la colaboración con las de otros países, la participación en programas de intercambio de alumnos o la contratación de profesores foráneos. Todo ello con el objetivo de incrementar el número de alumnos extranjeros que eligen España para cursar sus estudios, el más bajo de Europa según un reciente estudio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Pese al liderazgo de España en el número de estudiantes Erasmus (como receptor y también como emisor), la proporción de alumnos de otros países matriculados en las instituciones nacionales respecto al total apenas alcanza un 2,8%, muy lejos de Reino

Objetivo: reducir la carga sobre las familias

Entre las decisiones más polémicas del ex ministro José Ignacio Wert destacó el llamado *tasazo* de 2012. Tal como explica Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), esta medida intentó “incrementar del 15% al 25% el coste de los estudios asumido por las familias”. El resultado fue un aumento en los ingresos del Estado de alrededor de 2.000 millones de euros. Pero también, según Michavila, “el cierre de las puertas de la universidad a las personas con menos recursos”. La *Comisión Wert* ya apuntó la necesidad de regresar a un modelo de financiación en el que la carga para los alumnos no fuese tan elevada. Según opina Rafael Puyol, uno de sus integrantes, “la actual mejora de la economía debe traducirse en más recursos públicos, mientras que las universidades han de esforzarse por captar más fondos privados”.

Unido (17,1%), Francia (11,8%), Alemania (7%) o incluso Grecia (5%).

Para revertir esta situación, Puyol aboga por “la definición de una política clara al respecto”, para lo que considera muy útil seguir el ejemplo de las escuelas de negocios españolas, donde los alumnos internacionales habitualmente superan a los españoles. Por su parte, Michavila destaca la necesidad de “hacer más atractiva la oferta de estudios de las universidades, además de aumentar su presencia en los foros internacionales”. Para ello, apuesta por el establecimiento de “programas de calidad e impartidos en inglés”, siguiendo el modelo existente en los Países Bajos, lo que “no precisa de grandes inversiones económicas, pero sí de impulsar la formación de los profesores en este tipo de destrezas”.

Estos cambios en la oferta educativa deberían ir acompañados de una mejor valoración de las instituciones nacionales en los principales rankings internacionales. En la actualidad, la universidad española mejor situada en estas clasificaciones es la de Barcelona y ni siquiera aparece entre las 150 mejores del mundo, mientras que la Autónoma de Madrid, la Complutense y la Pompeu Fabra, sus inmediatas perseguidoras, aparecen entre las posiciones 200 y 300. En todo caso, hay algo en lo que sí se ha mejorado en los últimos años



Universidad

de cara a potenciar la internacionalización de las aulas y es, según Puyol, “la eliminación de la prueba de selectividad para los alumnos extranjeros”. Pero, aunque se trata de “uno de los cambios más positivos que introdujo la Lomce”, añade, “precisaré de muchos más esfuerzos para que ofrezca los resultados esperados”.

Otro aspecto en el que la educación superior también deberá seguir trabajando es en su proximidad con el tejido productivo del país. Tal como apunta Luis López Sánchez, director de Recursos Humanos de la consultora Deloitte, “las empresas tienen que llamar a la puerta de las universidades para que éstas den soluciones a la demanda de los profesionales necesarios en el mercado laboral, en el presente y en el futuro, y las universidades, por su parte, tienen que hacer lo mismo para trasladar a las empresas la creatividad y la innovación que sale de sus aulas”. Para potenciar este equilibrio entre la formación y el entorno empresarial son esenciales los programas educativos *in company*. La propia Deloitte trabaja actualmente en varios proyectos de este tipo, sobre temas como la auditoría o la ciberseguridad, en colaboración con universidades y escuelas de negocios.

La investigación es uno de los ámbitos en los que más se echa en falta una mayor colaboración entre las instituciones educativas y el sector empresarial. Tanto el sector público como el privado aportan la misma cantidad de recursos a la I+D+i universitaria, cuando lo habitual en el resto de Europa es que la inversión de las empresas duplique a la destinada por los Estados. Del mismo modo, Michavila destaca la necesidad

de “incidir en el apartado cualitativo, porque el país ocupa una muy buena posición a nivel internacional en cuanto al volumen de investigaciones publicadas, pero cae muchos puestos en los rankings que tienen en cuenta la calidad de las mismas”.

La última gran reforma pendiente en la educación superior afecta, según Michavila, a la práctica docente. En su opinión, los profesores siguen acaparando todo el protagonismo en el actual modelo, frente al papel “pasivo” de los estudiantes. Para revertir esta situación, aboga por “revisar y actualizar los métodos de enseñanza, incorporando aspectos con los que

Según los principales rankings, ningún centro español figura entre los 150 mejores del mundo

Las empresas nacionales destinan la mitad que sus homólogas europeas a la investigación universitaria

los alumnos se encontrarán en su vida profesional, como las presentaciones en público, la asunción de responsabilidades o la toma de decisiones”. La nueva legislatura puede ser una gran ocasión para poner en marcha estos y otros cambios, si se consigue alcanzar ese tan deseado pacto de Estado por la educación. Pero para que funcione, “un hipotético acuerdo de este tipo requerirá de una gran consenso político, pero también académico, por lo que debe incluir la participación de los interlocutores universitarios”, concluye Puyol.